



ACT/CVTD-001/10

VOTO
4 JULIO
2010

Instituto Electoral del Estado

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y TRÁMITE DE DENUNCIAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO.-----

En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las diez horas del día veinte de enero de dos mil diez, en las instalaciones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, ubicado en el inmueble numero tres mil quinientos quince de la calle quince poniente de la colonia Belisario Domínguez, de esta ciudad de Puebla, se reunieron las siguientes personas en sus respectivos caracteres:

CONSEJERA ELECTORAL
ROSALBA VELÁZQUEZ PEÑARRIETA

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

CONSEJERO ELECTORAL
JOSÉ JOEL PAREDES OLGUÍN

SECRETARIO DE LA COMISIÓN

CONSEJERO ELECTORAL
MIGUEL DAVID JIMÉNEZ LÓPEZ

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN

CONSEJERO ELECTORAL
PAUL MONTERROSAS ROMÁN

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN

De igual forma con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 y 19 del Reglamento de Comisiones del Instituto Electoral del Estado, por invitación de la Presidenta de ésta Comisión se presentaron las siguientes personas:

NOE JULIÁN CORONA CABAÑAS

SECRETARIO GENERAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL DEL

ESTADO

RUBÉN GUTIÉRREZ ROSAS

TITULAR DE LA UNIDAD
JURÍDICA

Verificada la existencia de quórum legal para sesionar la Presidenta de la Comisión, pone a consideración de los integrantes de la misma el orden del día programado para esta sesión. Una vez sometido para su consideración el orden del día correspondiente, mismo que es aprobado por unanimidad de votos.-----

Por lo que respecta al punto tres del orden del día, el Secretario General del Instituto Electoral del Estado, en cumplimiento al ACUERDO-09/CVTD/181209 de sesión ordinaria de fecha dieciocho de diciembre del año en curso respecto a el número de denuncias que se han radicado y que han sido turnadas a este Órgano Auxiliar del Consejo General señalando nombres de los denunciantes y denunciados, una vez hechos los comentario por los integrantes de esta Comisión se continua con el desarrollo de la sesión.

Por lo que respecta al punto de Asuntos Generales, se le pide al Secretario General de este Organismo Electoral, haga la exposición del estado procesal en que se encuentra la denuncia numero DEN-001/09, por lo que los integrantes establecieron el siguiente acuerdo:

ACUERDO-01/CVTD/200110.- Vistos los autos que integran el expediente de DEN-001/09, presentada por el Representante del Partido Acción Nacional en contra de diversos ciudadanos y funcionarios de Gobierno, radicada en la Secretaria General de este Organismo Electoral, la Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias del Instituto Electoral del Estado, formula el siguiente acuerdo:

ANTECEDENTES

1. En fecha nueve de noviembre del dos mil nueve fue interpuesta, por el Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, Rafael Guzmán Hernández, formal denuncia por la presunta comisión de actividades y hechos ilícitos en contra del Partido Revolucionario Institucional y diversos ciudadanos militantes del mismo partido, enunciados en el cuerpo de la citada acusación.

2. Así las cosas y después de admitir la denuncia materia de la presente a trámite y substanciación, de acuerdo a lo señalado por el Reglamento para la Tramitación de Denuncias del Instituto Electoral del Estado, la Secretaría General requirió al Partido Político denunciante el cumplimiento de los requisitos indicados por el mencionado Reglamento, en atención a que no se indicó el domicilio para emplazar a los denunciados.

3. Con fecha diecisiete de noviembre de dos mil nueve, el representante propietario de Acción Nacional, cumplió en tiempo y forma el requerimiento efectuado por la Secretaría General, informando sobre los domicilios en los que se deberían llevar a cabo los emplazamientos, mismos donde la Secretaría General procedió a notificarlos.

4. Derivado de lo anterior algunos de los denunciados en uso de su derecho y garantía de audiencia, contestaron la denuncia, pero haciéndolo de manera cautelar e incluso uno de ellos (C. Mario Alberto Montero Serrano) promovió incidente de nulidad de actuaciones en contra de la diligencia de emplazamiento por considerar que ésta no se apegó a lo dispuesto por la normatividad aplicable.

Las personas a las que se hace referencia son las siguientes:

C. Javier López Zavala:

C. Mario Alberto Montero Serrano:

C. Gerardo María Pérez Salazar:

C. Pablo Fernández del Campo:

Resulta oportuno indicar que el Ciudadano Víctor Hugo Islas Hernández, no compareció a realizar manifestación alguna respecto de la denuncia planteada en su contra, y existen en el expediente constancias que acreditan que no fue notificado de manera personal.

5.- En el mismo tenor, el C. Valentín Meneses Rojas, con fecha tres de diciembre de dos mil nueve presentó un escrito en el que manifestaba que recibió una notificación consistente en pruebas supervenientes ofrecidas por el Partido Acción Nacional, por lo que hasta ese momento se enteró de que existe una denuncia interpuesta en su contra, por lo que solicita que se respete su garantía de audiencia y se vuelva a practicar la notificación en comento, pues se encuentra indefenso ante un procedimiento iniciado en su contra.

CONSIDERANDOS

1. Que, según lo dispuesto por el artículo 5, 6 y 11 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias que a la letra dicen:

ARTÍCULO 5.- La interpretación del presente Reglamento se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, observando lo dispuesto por el artículo 4 del Código.

ARTÍCULO 6.- Los casos no previstos en el presente Reglamento, serán resueltos por la Comisión

ARTÍCULO 11.- Son atribuciones de la Comisión:

I. Recibir y sustanciar las denuncias presentadas;

VIII. Interpretar el presente Reglamento y resolver los casos no previstos en él y, en su caso, someter a aprobación del Consejo los criterios que considere pertinentes;

IX. Acordar las medidas conducentes para garantizar el adecuado desarrollo del procedimiento y normar cada una de sus etapas en caso de que existan violaciones al mismo;

XI. Vigilar en el ámbito de su competencia el cumplimiento del presente Reglamento; y

XII. Las demás que le confiera el presente Reglamento, el Consejo y las demás disposiciones aplicables.

Por lo tanto son atribuciones de la Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias como Órgano auxiliar del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, sustanciar las denuncias presentadas, acordar las medidas que garanticen el desarrollo del procedimiento, y vigilar el cumplimiento del Reglamento e interpretarlo.

En este orden de ideas, esta Comisión de Vigilancia y Trámite de denuncias resulta competente para conocer y resolver sobre las manifestaciones que han hecho los denunciados respecto de la forma en la que se practicaron los emplazamientos materia de este estudio, pues eventualmente pueden representar violaciones al procedimiento seguido en la sustanciación de la denuncia radicada con el número DEN-001/09.

2. Que, de las manifestaciones efectuadas en contra de las notificaciones de emplazamiento efectuadas por la Secretaría General del Organismo deben considerarse de orden público y en consecuencia de estudio preferente, porque puede representar violaciones a las garantías de audiencia y legítima defensa consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese sentido esta Comisión discurre que siendo oficioso el estudio de los emplazamientos y las constancias que obran en el expediente de referencia, por tratarse el emplazamiento de un asunto de orden público y de previo y especial pronunciamiento, debemos referir que las cuestiones que le atañen deberán ser desahogadas de plano, sin forma de sustanciación y fallándose sin actos procesales de los interesados.

Para robustecer lo planteado transcribimos lo siguiente:

"Don Carlos Arellano y García del propio artículo 35 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución de la República, deriva las siguientes reglas sobre los incidentes en el Amparo:

Los de Especial Pronunciamiento, que requieren de una resolución especialmente referida a ellos, sin reservarse para ser resueltos en definitiva. Después de tramitado el Incidente, con intervención de quienes tienen injerencia legal, mediante la presentación de los escritos correspondientes, y en su caso después de la recepción de pruebas, se dictará resolución interlocutoria respectiva.

Los incidentes que por su naturaleza fueran de previo y especial pronunciamiento, se decidirán de plano y sin forma de substanciación...

...No se substanciarán con actos procesales de los interesados y del órgano jurisdiccional sino que éste último fallará de plano los incidentes aludidos.

...

...Los Incidentes de Previo y Especial Pronunciamiento son aquellos que se resolverán antes de dictarse la sentencia definitiva.

El maestro Alfonso Noriega, por su parte clasifica a los incidentes en dos tipos específicos:

A...

B.- Incidentes de Previo y Especial Pronunciamiento, o sean los que por referirse al fondo del asunto principal, o bien a la eficacia de las actuaciones requieren una resolución peculiar y previa, con suspensión del procedimiento.

A...

B.- El Incidente de Nulidad de Actuaciones tiene su fundamento en artículo 32 de la Ley de Amparo y procede su tramitación como artículo de especial pronunciamiento, pero no suspenderá el procedimiento y en una Audiencia se substanciará, recibiendo y desahogando las pruebas ofrecidas por las partes, las que expresarán sus alegatos y se dictará la Resolución procedente al caso."¹

¹ Saucedo López, Antonio, "Los Incidentes en el Amparo". Jurídica Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, México, num. 18, 1986-1987, Págs. 155 a 158.

Sirva también como ejemplo orientador lo dispuesto por artículo 35 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se transcribe a continuación:

Artículo 35.- En los juicios de amparo no se substanciarán más artículos de especial pronunciamiento que los expresamente establecidos por esta ley...

...

Los demás incidentes que surjan, si por su naturaleza fueren de previo y especial pronunciamiento, se decidirán de plano y sin forma de substanciación. Fuera de estos casos, se fallarán juntamente con el amparo en la sentencia definitiva, salvo lo que dispone esta ley sobre el incidente de suspensión.

Así, tenemos que las controversias relativas al emplazamiento, deben considerarse asuntos de previo y especial pronunciamiento, pues implican violaciones a la garantía de audiencia, el debido proceso y las formalidades esenciales del procedimiento.

3. En términos de lo establecido en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4, 108 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, 15 fracción VIII, incisos e) y f) del Reglamento de Comisiones del Instituto Electoral del Estado, artículo 5, 6, 7, 8 y 40, 41 y 43 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias del Instituto Electoral del Estado, toda vez que es una facultad de este Órgano Auxiliar que se cumplan todas y cada una de las formalidades en las denuncias que hacen de conocimiento por esta Comisión y en las cuales son de competencia de la misma en términos de las disposiciones aplicables, tomando lo manifestado por el Secretario General de este Organismo Electoral, los integrantes de esta Comisión establecen lo siguiente:

La falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio. Para ilustrar lo anterior, cabe invocar el contenido de las siguientes jurisprudencias:

" EMPLAZAMIENTO IRREGULAR. CONSTITUYE UNA DE LAS VIOLACIONES PROCESALES DE MAYOR MAGNITUD Y DE CARACTER MAS GRAVE EL. Tesis XX.65 K. Novena Época. Instancia, Tribunales Colegiados de Circuito. Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, Abril de 1996, página 389.

"SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Tesis P./J. 149/2000. Novena Época. Instancia, Pleno. Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, Diciembre de 2000, página 22.

" EMPLAZAMIENTO ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO Séptima Época. Instancia, Tercera Sala. Consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 163-168 Cuarta parte, página 195.

En efecto, dicha importancia y trascendencia puede advertirse en el hecho de que, por un lado, las leyes procesales regulan detalladamente el emplazamiento, estableciendo las formalidades de que debe estar investido, y por otro, la falta de apego a esas formalidades trae como consecuencia su nulidad.

Igualmente, el cumplimiento de las formalidades en la práctica del emplazamiento, tiene como finalidad garantizar, hasta donde racionalmente sea posible, que el demandado tenga noticia cierta y plena del inicio de un procedimiento en su contra y de las razones del mismo, para que así tenga realmente oportunidad de defenderse.

Con el fin de que en lo posible, se garantice que el interesado o interesados tengan real conocimiento del procedimiento que se les inicia ya que sólo así se logra que la diligencia cumpla su cometido, que en el caso consiste en hacer del conocimiento efectivo del o de los denunciados que deberá de darse la garantía de audiencia.

La anterior interpretación permite, de mejor manera, el respeto puntual a la garantía de audiencia, finalidad ésta que, como se ha precisado, es la que se persigue con el emplazamiento, pues así se evita la indefensión del afectado, ya que de otra forma no se garantizaría que el demandado tuviera conocimiento de la cita, y por ende, tuviera posibilidad de atenderla lo que a la postre implicaría el desconocimiento del inicio de un procedimiento sancionador en su contra, produciendo su indefensión, que, se insiste, es precisamente lo que pretende evitarse con el emplazamiento a la audiencia de pruebas y alegatos.

La expresión garantía de audiencia, la cual es dable no sólo ante los órganos jurisdiccionales, sino también ante las autoridades administrativas, como ocurre en el presente caso.

Por tanto el derecho del debido proceso, de defensa o de audiencia no puede desvincularse de la acción procesal, puesto que la misma tiene carácter bilateral, es decir es común a ambas partes de la controversia jurídica, y no podemos concebir a la propia acción sino cuando se ejercita por conducto de un procedimiento que permita la adecuada defensa de las dos partes, puesto que la propia acción implica no sólo el inicio sino la continuación del proceso hasta sus últimas etapas, incluyendo la ejecución, con excepción de la de carácter penal que se atribuye a autoridades administrativas, aun cuando se advierte la creciente intervención de los llamados jueces de ejecución.

Que, continuando con el estudio planteado en este acuerdo, corresponde a esta Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el Reglamento para la Tramitación de Denuncias aprobado por el Consejo General de este Organismo, entrar al estudio de las inconformidades planteadas por los denunciados que han quedado precisados en el apartado de antecedentes, para determinar si les asiste la razón y en consecuencia determinar lo procedente respecto de la inconformidad que plantearon con el emplazamiento que se practicó por la Secretaría General del Organismo.

Una vez que se analizaron las constancias que integran el expediente formado con motivo de la denuncia en comento, esta Comisión infiere que les asiste la razón a los ciudadanos señalados en el capítulo de antecedentes de este acuerdo, en el sentido de que los emplazamientos no fueron realizados como lo disponen los artículos 7 y 8 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias del Instituto Electoral del Estado, que a continuación se transcriben:

ARTÍCULO 7.- Las notificaciones podrán hacerse de manera personal en el domicilio que se señale para tal efecto, o bien en los estrados del Instituto.

I. Deberán notificarse personalmente:

- a) Los requerimientos;
- b) El emplazamiento al denunciado;
- c) La notificación para la presentación de los alegatos por las partes; y
- d) Las resoluciones que estime necesarias la Comisión o el Consejo.

II. Deberán notificarse por estrados:

- a) Cuando las partes señalen un domicilio que no resulte cierto;
- b) Cuando las partes señalen un domicilio que no se encuentre en la ciudad de Puebla;
- c) Cuando la notificación personal no haya sido entregada al denunciado, y se haya dejado citatorio para su notificación; y
- d) Las demás notificaciones que señale el presente Reglamento.

ARTÍCULO 8.- Las notificaciones personales se realizarán en el domicilio señalado por el interesado, levantándose para tal efecto la certificación correspondiente, la cual contendrá por lo menos:

- I. La descripción del acto o documento que se notifica;
- II. Lugar, hora y fecha en que se hace;
- III. Nombre de la persona con quien se entienda la diligencia; y
- IV. Nombre del notificador.

Si no se encuentra al interesado en su domicilio se le dejará con cualquiera de las personas que allí se encuentren un citatorio que contendrá:

- a) Denominación del Órgano que dictó la resolución que se pretende notificar;
- b) Datos del expediente en el cual se dictó;
- c) Extracto del acto que se notifica;
- d) Día y hora en que se deja el citatorio y nombre de la persona a la que se le entrega; y
- e) El señalamiento de la hora a la que, al día siguiente, deberá esperar la notificación.

Al día siguiente, en la hora fijada en el citatorio, el notificador se constituirá nuevamente en el domicilio y si el interesado no se encuentra, la notificación se entenderá con la persona que se encuentre en el domicilio, asentándose dicha circunstancia en la razón correspondiente, además la notificación se publicará en estrados.

Si a quien se busca se niega a recibir la notificación, o las personas que se encuentran en el domicilio se rehúsan a recibir el citatorio, o no se encuentra nadie en el lugar, éste se fijará en el acceso al domicilio donde se practique la notificación, procediéndose a realizar la notificación por estrados, asentándose razón de ello en autos.

A efecto de cumplimentar lo señalado en el párrafo anterior, las cédulas de notificación personal deberán contener:

- a) La descripción del acto o resolución que se notifica;
- b) Lugar, hora y fecha en que se hace;
- c) Nombre de la persona con quien se entienda la diligencia, y
- d) Nombre y firma del notificador.

Cuando los promoventes omitan señalar domicilio, éste no resulte cierto o se encuentre ubicado fuera de la ciudad de Puebla todas las notificaciones se practicarán por estrados.

De lo anterior se puede apreciar lo siguiente:

El emplazamiento deberá ser personal, es decir debe (necesariamente) entenderse con el ciudadano al que va dirigido (Inciso b, Art. 7), con la prevención de que de no encontrarse, se dejará citatorio con la persona que se halle en el domicilio señalado, que se cumplimentará al día siguiente, y en el caso de no encontrarse de nueva cuenta el ciudadano a emplazar, la notificación se entenderá con la persona que se encuentre en el domicilio (Art. 8), o bien si no se encuentra nadie en el lugar, el documento se fijará en la puerta del mismo, procediéndose a notificar, en este caso el emplazamiento, vía los estrados del Instituto.

Ahora bien, derivado del análisis en profundidad de las constancias que integran el expediente en alusión, se desprende que resulta necesario estudiar los preceptos constitucionales relativos a la legalidad en los emplazamientos materia del presente acuerdo, teniendo lo siguiente:

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

...

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

...

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes.

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

...

En este sentido, la correcta aplicación de las disposiciones constitucionales y el mismo imperio del principio de legalidad, indican que las formalidades esenciales del procedimiento y la debida audiencia deben ser primordiales en la actuación de las autoridades

Los formalidades esenciales del procedimiento y la debida audiencia son nociones elevadas al rango Constitucional debido a su relevancia, siendo en perspectiva, bases fundamentales del estado de derecho en sí, por lo que sobre estas bases se puede concluir que los emplazamientos en referencia no cumplieron con las formalidades requeridas expresamente por la normatividad, como ya se ha descrito con anterioridad.

Para abundar, existe un procedimiento con las formalidades necesarias para asegurar la constitucionalidad y el debido otorgamiento de la garantía de audiencia y defensa para el ciudadano en contra de quien se ejecuta el acto en estudio, desprendiéndose de las constancias del expediente de Denuncia DEN-001/09 que los procedimientos de emplazamiento realizados en este caso, no estuvieron apegados al mismo, lo que ha quedado plenamente acreditado.

En ese último sentido, en una primera instancia, se deberá reponer los emplazamientos de los denunciados que se han dolido del que se les efectuó, ya que les asiste la razón y está plenamente acreditado que los emplazamientos que se les realizaron fueron irregulares en su forma, ya que como se desprende del siguiente criterio jurisprudencial, como ya se ha afirmado, el emplazamiento es de orden público.

Séptima Época

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 163-168, Cuarta Parte

Página: 195

EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO. La falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los Jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no y si, en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia.

Lo anterior es concluyente, y sirve para demostrar que un procedimiento de autoridad de cualquier carácter, si no ha sido informado debidamente al ciudadano en contra de quien se ejercita, ejecuta o bien se sustancie es claramente violatorio de lo dispuesto por las disposiciones constitucionales que ya se han transcrito.

Así como tiene aplicación los siguientes criterios establecidos por el máximo Tribunal en materia electoral:

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. DEBE REALIZARSE CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD.—Las disposiciones contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encaminadas a salvaguardar a los gobernados de los actos arbitrarios de molestia y privación de cualquier autoridad, ponen de relieve el principio de prohibición de excesos o abusos en el ejercicio de facultades discrecionales, como en el caso de la función investigadora en la fiscalización del origen, monto y destino de los recursos de los partidos políticos. Este principio genera ciertos criterios básicos que deben ser observados por la autoridad administrativa en las diligencias encaminadas a la obtención de elementos de prueba, que atañen a su idoneidad, necesidad y proporcionalidad. La idoneidad se refiere a que sea apta para conseguir el fin pretendido y tener ciertas probabilidades de eficacia en el caso concreto, por lo que bajo este criterio, se debe limitar a lo objetivamente necesario. Conforme al criterio de necesidad o de intervención mínima, al existir la posibilidad de realizar varias diligencias razonablemente aptas para la obtención de elementos de prueba, deben elegirse las medidas que afecten en menor grado los derechos fundamentales de las personas relacionadas con los hechos denunciados. De acuerdo al criterio de proporcionalidad, la autoridad debe ponderar si el sacrificio de los intereses individuales de un particular guarda una relación razonable con la fiscalización de los recursos de los partidos políticos para lo cual se estimará la gravedad de los hechos denunciados, la naturaleza de los derechos enfrentados, así como el carácter del titular del derecho, debiendo precisarse las razones por las que se inclina por molestar a alguien en un derecho, en aras de preservar otro valor. **Tercera Época:** Recurso de apelación. SUP-RAP-050/2001.—Partido Revolucionario Institucional.—7

de mayo de 2002.—Unanimidad de votos. Recurso de apelación. SUP-RAP-054/2001.—Partido de la Revolución Democrática.—7 de mayo de 2002.—Unanimidad de votos. Recurso de apelación. SUP-RAP-011/2002.—Partido de la Revolución Democrática.—11 de junio de 2002.—Unanimidad de votos. **Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, páginas 51-52, Sala Superior, tesis S3ELJ 62/2002. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 235-236.**

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. DEBEN PRIVILEGIARSE LAS DILIGENCIAS QUE NO AFECTEN A LOS GOBERNADOS.—

Las amplias facultades del secretario técnico de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas para investigar y allegarse oficiosamente elementos de prueba en los procedimientos administrativos sancionadores de su competencia, se encuentran limitadas por los derechos fundamentales del individuo consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantizan la libertad, dignidad y privacidad del individuo en su persona, derechos y posesiones; derechos que deben ser respetados por toda autoridad a las que, por mandato constitucional, se les exige fundar y motivar las determinaciones en las que se requiera causar una molestia a los gobernados, pues la restricción eventual permitida de los derechos reconocidos constitucionalmente debe ser la excepción, y por esta razón resulta necesario expresar los hechos que justifiquen su restricción. De esta forma, se deben privilegiar y agotar las diligencias en las cuales no sea necesario afectar a los gobernados, sino acudir primeramente a los datos que legalmente pudieran recabarse de las autoridades, o si es indispensable afectarlos, que sea con la mínima molestia posible. **Tercera Época:** Recurso de apelación. SUP-RAP-050/2001.—Partido Revolucionario Institucional.—7 de mayo de 2002.—Unanimidad de votos. Recurso de apelación. SUP-RAP-054/2001.—Partido de la Revolución Democrática.—7 de mayo de 2002.—Unanimidad de votos. Recurso de apelación. SUP-RAP-011/2002.—Partido de la Revolución Democrática.—11 de junio de 2002.—Unanimidad de votos. **Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, páginas 52-53, Sala Superior, tesis S3ELJ 63/2002. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 236-237.**

RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES.—

Tratándose del incumplimiento de un deber jurídico, en tanto presupuesto normativo, y la sanción, entendida como consecuencia jurídica, es necesario subrayar que por llevar implícito el ejercicio del poder correctivo o sancionador del Estado (*ius puniendi*), incluido todo organismo público (tanto centralizado como descentralizado y, en el caso específico del Instituto Federal Electoral, autónomo) debe atenderse a los principios jurídicos que prevalecen cuando se pretende restringir, limitar, suspender o privar de cierto derecho a algún sujeto, para el efecto de evitar la supresión total de la esfera de derechos políticos de los ciudadanos o sus organizaciones políticas con la consecuente transgresión de los principios constitucionales de legalidad y certeza, máxime cuando se reconoce que ese poder punitivo estatal está puntualmente limitado por el aludido principio de legalidad.

Así, el referido principio constitucional de legalidad electoral en cuestiones relacionadas con el operador jurídico: *La ley ... señalará las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de ...* (dichas) *disposiciones* (artículo 41, párrafo segundo, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), es la expresión del principio general del derecho *nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta et stricta*, aplicable al presente caso en términos de los artículos 3, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo cual implica que en el régimen administrativo sancionador electoral existe: a) Un principio de reserva legal (lo no prohibido está permitido), así como el carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones, esto es, sólo las normas jurídicas legislativas determinan la causa de incumplimiento o falta, en suma, el presupuesto de la sanción; b) El supuesto normativo y la sanción deben estar determinados legislativamente en forma previa a la comisión del hecho; c) La norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en una forma escrita (abstracta, general e impersonal), a efecto de que los destinatarios (tanto ciudadanos, como partidos políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en materia electoral) conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los principios constitucionales de certeza y objetividad (en este caso, como en el de lo expuesto en el inciso anterior, se está en presencia de la llamada garantía de tipicidad) y, d) Las normas requieren una interpretación y aplicación estricta (*odiosa sunt restringenda*), porque mínimo debe ser el ejercicio de ese poder correctivo estatal, siempre acotado y muy limitado, por cuanto que los requisitos para su puesta en marcha deben ser estrechos o restrictivos. **Tercera Época:** Recurso de apelación. SUP-RAP-013/98.—Partido Revolucionario Institucional.—24 de septiembre de 1998.—Unanimidad de votos. Recurso de apelación. SUP-RAP-034/2003 y acumulado.—Partido de la Revolución Democrática.—26 de junio de 2003.—Unanimidad de votos. Recurso de apelación. SUP-RAP-025/2004.—Partido Verde Ecologista de México.—11 de junio de 2004.—Unanimidad de votos

Sala Superior, tesis S3ELJ 07/2005. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 276-278.

En este orden de ideas, la Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias considera que se debe dejar sin efecto la notificación practicada por la Secretaría General y ordena practicarla de nuevo con las formalidades que de manera puntual se señalan en el Reglamento para la Tramitación de Denuncias.

Se debe precisar que en virtud de este acuerdo dejar sin efecto los emplazamientos efectuados por la Secretaría General a los ciudadanos:

1. **C. Javier López Zavala.**
2. **C. Gerardo María Pérez Salazar.**
3. **C. Pablo Fernández del Campo.**
4. **C. Mario Alberto Montero Serrano.**

En virtud de que se desprenden violaciones al debido proceso y a los principios de legalidad y seguridad jurídica tal como lo establecen los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo señalados en los artículos 7 y 8 del Reglamento para la tramitación de Denuncias del Instituto Electoral del Estado, toda vez que los ciudadanos señalados del 1 al 4 no fueron emplazados de manera personal, así como no existe constancia de que se les haya dejado citatorio para el día siguiente a efecto de que fueran debidamente llamados al procedimiento que se les iniciaba, así como no existe certeza de los documentos de los cuales se les corría traslado, por consiguiente de las pruebas que fueron ofrecidas por el denunciante.

Por lo que respecta al **C. Víctor Hugo Islas Hernández**, no existe en el expediente constancia que acredite que hayan sido notificado de manera personal, en su domicilio personal en calidad de ciudadano, aunque si bien es cierto se le dejó un citatorio y fue recibido por una persona distinta al denunciado no existe constancia de que se le haría de conocimiento al interesado ni mucho menos que el mismo sería encontrado en el domicilio señalado por el denunciante, por tanto no hay certeza de que este corresponda al mismo para ser llamado al procedimiento que se le iniciaba.

Por lo que corresponde al **C. Valentín Meneses Rojas**, con fecha tres de diciembre de dos mil nueve, éste, presentó un escrito en el que manifestó que recibió una notificación consistente en pruebas supervenientes ofrecidas por el Partido Acción Nacional, por lo que hasta ese momento se enteró de que existe una denuncia interpuesta en su contra, por lo que solicitó que se respetara su garantía de audiencia; de lo manifestado por el denunciado y de las actuaciones que obran en el presente expediente se desprende que fue recibido por una persona distinta al denunciado no existe constancia de que se le notificara personalmente, por consiguiente si se entendía la notificación con persona

diversa al denunciante no existe citatorio en donde al día siguiente se le haría de conocimiento al interesado la denuncia iniciada en su contra.

Por tanto, es posible establecer que de los autos que integran el presente expediente se desprenden violaciones al debido proceso y a los principios de legalidad y seguridad jurídica tal como lo establecen los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es así porque la notificación de un acto de autoridad no debe efectuarse arbitrariamente, sino cumplir con la garantía del debido proceso legal, y respetar el principio de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales.

Así las cosas, si la autoridad trasciende la esfera jurídica del ciudadano, es evidente que hay una afectación a las garantías de seguridad jurídica y al principio de legalidad, ya que no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento en un asunto en que dada su relevancia debió emplazarse legalmente, de acuerdo con lo que establece la Constitución Federal y la ley reglamentaria de la materia.

Así lo ha señalado el Poder Judicial Federal, al dictar la siguiente tesis que puede ser visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Mayo de 2003, Registro No. 184307, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Página: 1237, Tesis: VIII.3o.12 C, Materia Civil.

NOTIFICACIÓN POR CÉDULA. PARA SU VALIDEZ DEBE CONTENER, ENTRE OTROS DATOS, EL NOMBRE Y APELLIDO DE QUIEN LA PRACTIQUE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA). Las formalidades esenciales del procedimiento son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada, antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen, entre otras, en la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. Por lo que para el debido respeto de la garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional, consistente en el otorgamiento al gobernado de la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, cuyo debido respeto impone a las autoridades la de que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, es necesario que las notificaciones por cédula satisfagan los requisitos establecidos en la ley, pues, de no ser así, la ilegalidad del emplazamiento ocasionaría su nulidad de pleno derecho, así como del procedimiento seguido en el juicio. Por tanto, si el artículo 208, fracción V, inciso f), del

Código Procesal Civil del Estado de Coahuila establece expresamente que la notificación por cédula del emplazamiento a juicio debe contener, entre otros requisitos "el nombre, apellido y cargo de la persona que practique la notificación", la omisión en que incurra el diligenciario al efectuar el emplazamiento, consistente en no asentar su cargo, nombre y apellido, infringe en perjuicio de la demanda las garantías de seguridad y legalidad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.

También es criterio orientador para ese Tribunal la siguiente jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Marzo de 2002, Registro No. 187473, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Página 1248, Tesis: VI.3o.A. J/11 de Jurisprudencia, Materia Administrativa.

NULIDAD QUE DECLARA LA SENTENCIA FISCAL DEBIDO A LA NOTIFICACIÓN ILEGAL DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. DEBE SER LA EXCEPCIONAL CON FUNDAMENTO EN LA PARTE FINAL DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 239 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Este Tribunal sostiene la tesis consultable en la página mil ciento ochenta y cinco del Tomo XIII, mayo de dos mil uno, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "NULIDAD QUE DECLARA LA SENTENCIA FISCAL DEBIDO A LA NOTIFICACIÓN ILEGAL DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. DEBE SER LISA Y LLANA Y NO PARA EFECTOS."; sin embargo, si bien el contenido de esta tesis pudiera aparentar un contrasentido, en realidad no se trata sino, en todo caso, de impropiedad en el manejo técnico del lenguaje, que conviene depurar, pues tal como se dijo en dicha tesis, cuando están de por medio las facultades discrecionales de las autoridades ejecutoras, como en las de comprobación, la nulidad de sus actos no impide que vuelva a realizarlos, si aún puede hacerlo, aunque tampoco la conmina a ello; pero, en esa tesitura, el calificativo del tipo de nulidad no es de lisa y llana, sino excepcional, en términos del artículo 239, fracción III, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, razón por la cual, para efectos de propiedad técnica, el texto de la tesis, con el rubro ya indicado al inicio de ésta, debe quedar así: La notificación es el acto jurídico que constituye el presupuesto necesario para el inicio del procedimiento de comprobación, ya que del análisis del artículo 44, fracciones II y III, del código tributario federal, se desprende que el procedimiento se inicia precisamente con la entrega al contribuyente o a su representante, en vía de notificación, del oficio respectivo, de suerte que es el momento mismo de la notificación practicada de manera legal cuando se inicia válidamente el procedimiento para el ejercicio de las facultades de comprobación. De ahí que si la notificación del documento que implica el inicio de dichas facultades se realizó en forma contraria a la establecida por la ley, cabe concluir que no iniciaron debidamente el ejercicio de tales facultades, actualizándose, entonces, la nulidad prevista por la última parte de la fracción III del artículo 239 del aludido código, es decir, la excepcional, sin perjuicio, desde luego, de que si la autoridad fiscal se encuentra aún en tiempo, y está en posibilidad de hacerlo, inicie de nueva cuenta y en debida forma el procedimiento de que se trata. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X,

agosto de 1999, página 185, tesis 2a./J. 89/99, de rubro: "ÓRDENES DE VISITA DOMICILIARIA. LA NULIDAD DECRETADA POR VICIOS FORMALES EN SU EMISIÓN, DEBE SER DECLARADA CON FUNDAMENTO EN LA PARTE FINAL DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 239 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN."

Nuestro Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que el derecho a que se administre justicia, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es de carácter absoluto, sino que se encuentra sujeto a que se cumplan los ya apuntados presupuestos procesales; lo anterior lo establece en la siguiente jurisprudencia:

"Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XIV, Septiembre de 2001

Tesis: P./J. 113/2001

Página: 5

JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da.

Contradicción de tesis 35/2000. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Cuarto Circuito. 10 de septiembre de 2001. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.

El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy diez de septiembre en curso, aprobó, con el número 113/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diez de septiembre de dos mil uno."

En efecto, la importancia y trascendencia del emplazamiento, en las diversas áreas del derecho, ha sido reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales federales, señalando que el "emplazamiento por su naturaleza y trascendencia, debe ser siempre cuidadosamente hecho, y los vicios del mismo deben ser tomados en cuenta ineludiblemente por la autoridad federal porque su ilegalidad implica una extrema gravedad por las consecuencias que puede acarrear a quien en forma defectuosa fue llamado a juicio, o bien, no lo fue. Por ello la falta de emplazamiento o su realización en forma contraria a las disposiciones legales aplicables constituye una de las violaciones procesales de mayor magnitud y de carácter más grave, que imposibilita al demandado para poder defenderse."

En suma, la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio. Para ilustrar lo anterior, cabe invocar el contenido de las siguientes jurisprudencias:

"EMPLAZAMIENTO IRREGULAR. CONSTITUYE UNA DE LAS VIOLACIONES PROCESALES DE MAYOR MAGNITUD Y DE CARACTER MAS GRAVE El emplazamiento por su naturaleza y trascendencia, debe ser siempre cuidadosamente hecho, y los vicios del mismo deben ser tomados en cuenta ineludiblemente por la autoridad federal porque su ilegalidad implica una extrema gravedad por las consecuencias que puede acarrear a quien en forma defectuosa fue llamado a juicio, o bien, no lo fue. Por ello la falta de emplazamiento o su realización en forma contraria a las disposiciones legales aplicables constituye una de las violaciones procesales de mayor magnitud y de carácter más grave, que imposibilita al demandado para poder defenderse³."

Tesis XX.65 K. Novena Época. Instancia, Tribunales Colegiados de Circuito. Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, Abril de 1996, página 389.

En atención a que el desahogo de diversas solicitudes de información y diligencias practicadas por la Secretaría General que constan en el expediente materia del análisis, las mismas quedan intocadas en atención a que los diversos 41 y 43 del Reglamento en cita, establecen que las diligencias y solicitudes de información que se requieran por el denunciante podrán efectuarse si se justifica su idoneidad y necesidad, a partir del momento de la presentación de la denuncia, por lo que la reposición de las notificaciones materia de este análisis no las afecta.

4. En lo tocante a los domicilios en donde serán realizados los emplazamientos, estos deberán ser los mismos señalados por el denunciante, según lo disponen los artículos 7 y 8 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias:

ARTÍCULO 7.- Las notificaciones podrán hacerse de manera personal en el domicilio que se señale para tal efecto...

ARTÍCULO 8.- Las notificaciones personales se realizarán en el domicilio señalado por el interesado, levantándose para tal efecto la certificación correspondiente...

ARTÍCULO 33.- La denuncia se interpondrá por escrito ante el Consejo y deberá cumplir con los siguientes requisitos:

...

IV. Nombre y domicilio del denunciado;...

Por lo que se les deberá de emplazar a los denunciados en los domicilios señalados por el denunciante dentro de la denuncia en que se actúa, tal como se desprende de la certificación llevada a cabo por el Secretario General de este Instituto Electoral dentro de la denuncia DEN-001/09, presentada por el Representante del Partido Acción Nacional en contra de diversos ciudadanos y funcionarios de Gobierno.

5. Este acuerdo no es violatorio de garantías del denunciante ya que no se resuelve el fondo del asunto, sino conceptos meramente procesales, dejando intocada su denuncia y las correspondientes manifestaciones que de ella se desprenden.

Por lo anteriormente expuesto, la comisión de vigilancia y trámite de denuncias instruye al Secretario General lo siguiente:

PRIMERO.- Deje sin efecto los emplazamientos realizados a los ciudadanos, Javier López Zavala, Mario Alberto Montero Serrano, Gerardo María Pérez Salazar, Pablo Fernández del Campo, Víctor Hugo Islas Hernández y Valentín Jorge Meneses Rojas, y demás actuaciones que se les hayan realizado.

SEGUNDO.- Por lo tanto reponga los emplazamientos a los denunciados enlistados, en los domicilios señalados por el denunciante y continúe el desahogo del expediente.

TERCERO.- Se dejan sin efectos las actuaciones practicadas a los denunciados que siguieron al emplazamiento, por lo que repítaseles todas ellas, con excepción de las diligencias de investigación que siguen un cause distinto al meramente procesal como se desprende del artículo 41 y 43 del Reglamento.

CUARTO.- En la notificación que se haga a cada uno de los denunciados se deberá acompañar copia certificada del auto de inicio, certificación del requerimiento realizado al Partido Acción Nacional respecto de los domicilios de los demandados, copias cotejadas de lo que se le corre traslado al denunciado con número de folio o fojas así como certificación de las pruebas que se ofrecen por el denunciante; lo anterior aprobado por unanimidad de votos.-----

Por lo que respecta al rubro de Asuntos Generales se establecieron los siguientes acuerdos:

ACUERDO-02/CVTD/200110.- Cuando se requiera información para la integración de los expedientes de las denuncias que le son turnadas a este Órgano Auxiliar, los

integrantes de este Órgano Auxiliar, establecen que debe de prevalecer el mismo criterio de requerimiento para que proporcionen información que les sea solicitada a las Autoridades sean , Federales, Estatales y Municipales, así como para las personas físicas o morales; lo anterior aprobado por unanimidad de votos.-----

ACUERDO-03/CVTD/200110.- Una vez que sea requerida la información para la integración de los expedientes de las denuncias que le son turnadas a este Órgano Auxiliar, los integrantes de este Órgano Auxiliar, establecen que debe de prevalecer el mismo término de requerimiento establecido en los numerales 46 y 72 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias del Instituto Electoral del Estado, para que se proporcionen información que sea solicitada a las Autoridades sean Federales, Estatales y Municipales, así como para las personas físicas o morales; lo anterior aprobado por unanimidad de votos.-----

ACUERDO-04/CVTD/200110.- Se establece que el término para los requerimiento a las Autoridades sean Federales, Estatales y Municipales, así como para las personas físicas o morales, sea de tres días para la solicitud de información para la integración de un expediente que se inicia por las denuncias que se inician en términos del Reglamento para la Tramitación de Denuncias del Instituto Electoral del Estado, por lo que se le solicita al Secretario General de este Organismo Electoral señale a las partes que se les requiere información, el término al que se encuentran sujetos para proporcionar la información requerida por esta Comisión; lo anterior aprobado por unanimidad de votos.-----

ACUERDO-05/CVTD/200110.- Se le solicita al Secretario General de este Organismo Electoral que de las denuncias que son turnadas a la Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias, respecto de las diligencias que lleva a cabo dicha Secretaria, en términos del numeral 12 fracción VI del Reglamento para la Tramitación de Denuncias del Instituto Electoral del Estado, estas sean debidamente fundadas y motivadas con la finalidad de que se cumpla con las formalidades esenciales en todo procedimiento establecidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales; lo anterior aprobado por unanimidad de votos.-----

Siendo las catorce horas con quince minutos del día de la presente sesión se aprueba por unanimidad de votos dejar abierta la presente sesión, con la finalidad de que en caso de que se presente alguna denuncia los integrantes de esta Comisión puedan sesionar y darle el curso jurídico a la presentación de estas.

Siendo las nueve horas del día veintinueve de enero del año en curso se reinicia la sesión de fecha veinte de enero del año dos mil diez, verificado el quórum legal para sesionar, por lo que continuando con el rubro de Asuntos Generales la Presidenta de este Órgano Auxiliar pone a consideración de los integrantes el memorándum No. IEE/PRE/0195/10 de fecha veintiocho de enero del año dos mil diez remitido por el Consejero presidente de este Organismo por lo que se dicto el siguiente acuerdo:

ACUERDO-06/CVTD/200110.- En atención al memorándum No. IEE/PRE/195/10 de fecha veintiocho de enero del año en curso suscrito por el Presidente de este Organismo Electoral Lic. Jorge Sánchez Morales, mediante el cual remite a este Órgano Auxiliar escrito original de denuncia suscrito por el C. José Miguel Maya Pizaña, Apoderado General del Partido Revolucionario Institucional, por el que presenta formal denuncia en contra del C. Rafael Moreno Valle Rosas, precandidato del Partido Acción Nacional para la Gubernatura del Estado de Puebla y en contra del Partido Acción Nacional compuesto de dieciocho fojas y anexo consistente en:

1.- Copia Certificada en diecisiete fojas de fecha dieciocho de noviembre del año dos mil nueve expedido por el C. José N. Irabien Medina Notario Público número ocho de esta Capital, respecto del Poder Notarial Volumen número ciento noventa y tres, instrumento número diecinueve mil dos, del que se depende Poder General para Pleitos y Cobranzas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a través de su Representante Licenciado Alejandro Armenta Mier Presidente del Comité Directivo Estatal de dicho Instituto a favor del C. José Miguel Maya Pizaña.

2.- Testimonio de escritura que contiene " LA FE DE DE HECHOS POR MI LEVANTADA Y SOLICITADA POR DON JOSÉ MIGUEL MAYA PIZAÑA APODERADO GENERAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL " PRI ", expedida por el C. José N. Irabien Medina Notario Público número ocho de esta Capital, mediante Volumen número ciento noventa y ocho, instrumento número diecinueve mil setecientos noventa, de fecha de escritura de diecinueve de enero del año dos mil diez y fecha de testimonio diecinueve de enero del año dos mil diez, el cual consta de veintitrés fojas.

Documentos recibidos en la presidencia de este Órgano Auxiliar del Consejo General el día veintiocho de enero a las diecisiete horas con quince minutos, se tiene por presentada la presente denuncia y se le solicita a la Secretaría General de este Instituto se registre en el libro de denuncias con el número correspondiente atendiendo al procedimiento que se apruebe; por lo que una vez analizada la denuncia en coadyuvancia del Secretario General en términos de los numerales 11 fracciones I, II y III, 12 fracciones I y II, del Reglamento para la Tramitación de Denuncias del Instituto Electoral del Estado de este Instituto, se instaura **PROCEDIMIENTO ESPECIAL**, toda vez que los hechos materia de la presente pueden ser constitutivos de infracciones establecidas en el artículo 56 fracción II, por lo que se solicita a dicha Secretaria requiera al denunciante para que en el término improrrogable de veinticuatro horas siguientes a partir de la notificación correspondiente, de cumplimiento a lo establecido en el numeral 58 fracción VII, proporcionando a la Comisión de Vigilancia y Tramite de Denuncias a través de dicha Secretaria lo siguiente:

1.- Presentar las copias legibles necesarias para correr traslado al o los denunciados, tanto del escrito de denuncia como de las pruebas que acompañe al mismo.

Con el apercibimiento que de no hacerlo en el término ya señalado se tendrá por desechada dicha denuncia; lo anterior aprobado por unanimidad de votos -----

Siendo las diez horas del día veintinueve de enero del año dos mil diez se aprueba por unanimidad de votos realizar un receso para las ocho horas del primero de febrero del

año dos mil diez, con la finalidad de que se dé cumplimiento al ACUERDO-06/CVTD/200110 de la presente sesión, por la Secretaría General.

Siendo las ocho horas del día primero de febrero del año dos mil diez se reinicia la sesión de fecha veinte de enero del año en curso, verificado el quórum legal para sesionar, por lo que respecta al cumplimiento de ACUERDO-06/CVTD/200110 de la presente sesión, se dicto el siguiente acuerdo:

ACUERDO-07/CVTD/200110.- Se tiene dando cumplimiento al ACUERDO-06/CVTD/200110 respecto de presentar las copias legibles necesarias para correr traslado al o los denunciados, tanto del escrito de denuncia como de las pruebas que acompañe al mismo por el C. José Miguel Maya Pizaña, Apoderado General del Partido Revolucionario Institucional dentro de la denuncia presentada en contra del C. Rafael Moreno Valle Rosas, precandidato del Partido Acción Nacional para la Gubernatura del Estado de Puebla y en contra del Partido Acción Nacional, cumplimiento que fue informado a este Órgano Auxiliar por el Secretario General de este Organismo Electoral; así mismo toda vez que le ha sido asignada el número DEN- ESP-001/10; por lo que esta Comisión establece el siguiente auto de inicio y procedencia de la denuncia materia del presente acuerdo:

AUTO DE INICIO

En la Heroica Puebla de Zaragoza, en fecha primero de febrero del año dos mil diez, siendo las diez horas, los integrantes de la Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias del Consejo General del Instituto Electoral del Estado-----

HACEN CONSTAR-----

Que en términos de los numerales 89, 108 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, 15 fracción VIII del Reglamento de Comisiones del Instituto Electoral del Estado, 1, 2, 5, 6, 10, 11 fracciones I, II y III, 15, 30, 56 fracción II 57, 58, 59, 61 fracciones II, III y IV, 62 y 63 del Reglamento Para la Tramitación de Denuncias del Instituto Electoral del Estado, se tiene presentando formal denuncia por el C. José Miguel Maya Pizaña, Apoderado General del Partido Revolucionario Institucional en contra del C. Rafael Moreno Valle Rosas, precandidato del Partido Acción Nacional

para la Gubernatura del Estado de Puebla y en contra del Partido Acción Nacional, acompañando al mismo los siguientes documentos:

1.- Escrito de fecha veintisiete de enero del año dos mil diez signado por el C. José Miguel Maya Pizaña, Apoderado General del Partido Revolucionario Institucional compuesto de dieciocho fojas y anexo consistente en:

2.- Copia Certificada en diecisiete fojas de fecha dieciocho de noviembre del año dos mil nueve expedido por el C. José N. Irabien Medina Notario Público número ocho de ésta Capital, respecto del Poder Notarial Volumen número ciento noventa y tres, instrumento número diecinueve mil dos, del que se desprende Poder General para Pleitos y Cobranzas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), a través de su Representante Licenciado Alejandro Armenta Mier Presidente del Comité Directivo Estatal de dicho Instituto a favor del C. José Miguel Maya Pizaña;

3.- Testimonio de escritura que contiene " LA FE DE DE HECHOS POR MI LEVANTADA Y SOLICITADA POR DON JOSÉ MIGUEL MAYA PIZANA APODERADO GENERAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL " PRI ", expedida por el C. José N. Irabien Medina Notario Público número ocho de ésta Capital, mediante Volumen número ciento noventa y ocho, instrumento número diecinueve mil setecientos noventa, de fecha de escritura de diecinueve de enero del año dos mil diez y fecha de testimonio diecinueve de enero del año dos mil diez, el cual consta de veintitrés fojas;

En consecuencia regístrese en el libro de Denuncias con el número **DEN- ESP-001/10** Iniciándose **PROCEDIMIENTO ESPECIAL** del Reglamento para la Tramitación de Denuncias del Instituto Electoral del Estado y se tiene por admitida la denuncia del C. José Miguel Maya Pizaña, Apoderado General del Partido Revolucionario Institucional en contra del C. Rafael Moreno Valle Rosas, precandidato del Partido Acción Nacional para la Gubernatura del Estado de Puebla y en contra del Partido Acción Nacional, por presuntas violaciones a las disposiciones establecidas en el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.-----

-----CONSTE-----

Acto continuo, los Integrantes del Órgano Auxiliar: -----

-----**ACUERDAN**-----

-----Con fundamento en lo establecido en el artículo 108 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla; 11 fracciones I, II, 12 fracciones I, II y 56 fracción II del Reglamento para la Tramitación de Denuncias del Instituto Electoral del Estado se establece lo siguiente:

PRIMERO.- Este Órgano Auxiliar con la coadyuvancia de la Secretaria General de este Instituto establece la instauración del **PROCEDIMIENTO ESPECIAL** atendiendo a las siguientes disposiciones:

El numeral 3 del citado Reglamento define los procedimientos aplicables de la siguiente forma:

"XXII. Procedimiento sancionador ordinario: Procedimiento aplicable en cualquier tiempo para los casos de violaciones a las disposiciones del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

XXIII. Procedimiento especial sancionador: Procedimiento que tiene como finalidad determinar, de manera expedita, la presunta violación a las disposiciones del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla y la responsabilidad de los sujetos denunciados mediante la valoración de los medios de prueba que obren en el expediente."

---En ese contexto, los numerales 31 y 56 del citado Reglamento señala respecto del procedimiento ordinario y especial lo siguiente:

"ARTÍCULO 31.- El presente procedimiento será aplicable en cualquier tiempo para la atención de conductas imputables a sujetos infractores que vulneren las disposiciones del Código y sus normas reglamentarias."

"ARTÍCULO 56.- Este procedimiento tiene como finalidad determinar, de manera expedita, la existencia y responsabilidad en materia administrativa electoral de los ciudadanos, precandidatos, candidatos y partidos políticos o coaliciones, mediante la valoración de los medios de prueba e indicios que obren en el expediente.

I.- Fuera del proceso electoral cuando las denuncias tengan como motivo la comisión de conductas referidas a la ubicación física o al contenido de propaganda política o electoral impresa, de aquella pintada en bardas, o de cualquier otra diferente a la

transmitida por radio o televisión, así como cuando se refieran a actos anticipados de precampaña o campaña.

II.- Dentro del proceso electoral por faltas que se refieran en general a irregularidades en propaganda política o electoral de partidos políticos que calumnien a las personas o denigren a las instituciones, así como cuando se refieran a actos anticipados de precampaña o campaña."

Como se advierte de lo anterior, el procedimiento ordinario es aplicable en todo momento para la atención de las conductas contrarias a la normativa indicada. De igual forma, el procedimiento especial tiene como finalidad la atención de conductas contrarias y si bien es cierto que dentro del procedimiento especial se señala el conocimiento de presuntas violaciones relacionadas con actos anticipados de precampañas y campaña es de indicar que el citado procedimiento especial es de naturaleza preponderantemente preventivo y su finalidad esencial consiste en evitar que la conducta presumiblemente transgresora de la normativa electoral, como podría ser la difusión de actos anticipados de precampaña o campaña, de propaganda negra o denostativa, entre otros, genere efectos perniciosos e irreparables, ello a través de medidas tendentes a lograr la paralización, suspensión o cesación de los actos irregulares; a diferencia de lo que sucede con el procedimiento sancionador, cuya naturaleza es eminentemente coercitiva y ejemplar de los modelos de conducta; su objetivo fundamental consiste en la investigación de actos o conductas infractoras de la normativa electoral que puedan afectar el proceso electoral, a fin de aplicar la sanción correspondiente.

Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia emitida por el Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es **"PROCEDIMIENTO ESPECIALIZADO DE URGENTE RESOLUCIÓN. NATURALEZA Y FINALIDAD"** Debe indicarse que si bien el procedimiento especial tiene dos finalidades, una que es preventiva y otra que es sancionadora puesto que de sus disposiciones se desprende la facultad de sancionar las conductas conocidas a través del mismo, la tramitación del mismo es expedito y de acuerdo con el numeral 66 del Reglamento de la materia solo pueden ser aportadas por las partes pruebas documentales y técnicas.

Por lo que, considerando que de los hechos que se desprenden de la denuncia materia del presente documento se advierte la necesidad de una investigación exhaustiva de los mismos se deben tomar las medidas necesarias en la investigación de los hechos que permitan ejercer de manera correcta la atribución de la autoridad electoral para vigilar que las actividades de los partidos políticos se ciñan a los principios constitucionales y legales en materia electoral, así como para sancionarlos cuando sus actos se aparten de dichos principios rectores.

En ese contexto, en relación con lo anterior y previo análisis de las constancias que integran el presente expediente, mismas que son valoradas, esta autoridad considera fundado optar por el **PROCEDIMIENTO ESPECIAL** toda vez que la conducta se ajusta a la conducta desplegada por el sujeto infractor por faltas que se refiere a posibles actos anticipados de precampaña o campaña, y que a su vez, sean bastantes y suficientes para prevenir que cualquier otra persona realice una falta similar. -----

SEGUNDO.- Una vez que el denunciante satisface los requisitos señalados en el artículo 58 del reglamento en cita, se solicita al Secretario General de este Instituto, en apoyo de este Órgano Auxiliar, en términos de lo establecido en el numeral 63 emplace al denunciado en el domicilio que se desprende de actuaciones y se deberá acompañar copia cotejada del auto de inicio mismo que será rubricado por la Presidenta de este Órgano Auxiliar la Consejera Electoral Rosalba Velázquez Peñarrieta, del escrito del cual se le corre traslado al denunciado con número de folio o fojas así como certificación de las pruebas que se ofrecen por el denunciante-----

TERCERO.- Se le solicita a dicha Secretaria General, llévase a cabo la inspección ocular de los espectaculares en los lugares señalados por el denunciante dando fe de la existencia de los mismos, tomando placas fotográficas de ellos y una vez realizadas las citadas diligencias, estas sean agregadas al expediente en que se actúa y sean valoradas en su momento procesal oportuno-----

CUARTO.- Se remiten a dicha Secretaría General de este Organismo Electoral los documentos que se desprenden del citado acuerdo, lo anterior aprobado por unanimidad de votos. -----**CUMPLASE.**

Continuando con el rubro de Asuntos Generales se estableció el siguiente acuerdo

ACUERDO-08/CVTD/200110.- En los emplazamientos en los que la Secretaría General de éste Instituto lleve a cabo, respecto de las denuncias que conoce la Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias, se deberá acompañar copia cotejada del auto de inicio mismo que será rubricado por la Presidenta de este Órgano Auxiliar la Consejera Electoral Rosalba Velázquez Peñarrieta; lo anterior aprobado por unanimidad de votos.-----

Continuando con el rubro de Asuntos Generales respecto al cumplimiento de acuerdo 01/CVTD/200110 de la denuncia DEN-001/09, presentada por el Representante del Partido Acción Nacional en contra de diversos ciudadanos y funcionarios de Gobierno por el Secretario General de este Organismo, se estableció el siguiente acuerdo:

ACUERDO-09/CVTD/200110.- Tomando en consideración lo que se desprende del memorándum No. IEE/SG-240/10 de fecha primero de febrero del año dos mil diez signado por el Secretario General de este Instituto, en virtud de que no es posible emplazar al C. Javier López Zavala, denunciado dentro de la denuncia DEN-001/09, presentada por el Representante del Partido Acción Nacional en contra de diversos ciudadanos y funcionarios de Gobierno, requiérase al denunciante para que en el término de tres días proporcione el domicilio del denunciado con la finalidad de que se le corra traslado de la denuncia que ha interpuesto y se le dé cabal cumplimiento a lo establecido en los artículos 36 último párrafo, 37 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias del Instituto Electoral del Estado; lo anterior aprobado por unanimidad de votos.-----

Continuando con el rubro de Asuntos Generales se estableció el siguiente acuerdo:

ACUERDO-10/CVTD/200110.- Respecto al Memorandum No. IEE/PRE/0238/10, de fecha primero de febrero del año en curso, signado por el Consejero Presidente de este Instituto Electoral del Estado del que se desprenden las intervenciones de los C.C. Licenciado Rafael Guzmán Hernández y Licenciado Jorge Luis Blancarte Morales representantes de los Partidos Políticos Acción Nacional y Convergencia respectivamente, en la sesión ordinaria de fecha once de enero y concluida el veintinueve de enero del año en curso de Consejo General; por unanimidad de votos los integrantes de este Órgano Auxiliar, establecen que con la finalidad de que se esté en posibilidad de integrar los expedientes de las denuncias que son turnadas a esta Comisión y así garantizar las formalidades esenciales de un procedimiento y el debido proceso establecido en las disposiciones establecidas en los artículos 14, 15 y 17 Constitucionales, se le solicita a dichos Representantes se presenten las citadas denuncias en términos de lo señalado en el Reglamento para la Tramitación de las Denuncias del Instituto Electoral del Estado, con la finalidad de darles los causes legales correspondientes; por lo que se le solicita al Secretario General de este Instituto en coadyuvancia con esta Comisión notifique el presente acuerdo a dichos representantes.-----

ACUERDO-11/CVTD/200110.- Tomando en consideración que dentro del expediente que integra la denuncia DEN-001/09, presentada por el Representante del Partido Acción Nacional en contra de diversos ciudadanos y funcionarios de Gobierno, radicada en la Secretaria General de este Organismo Electoral, existen diversas diligencias por realizarse y con la finalidad de que esta Comisión de Vigilancia y Tramite de Denuncias lleve a cabo el principio de exhaustividad con la finalidad de integrar adecuadamente los expedientes que se inician y a fin de allegarse de medios de convicción al que están obligadas todas las autoridades, para efectos de emitir el proyecto de dictamen que en derecho resulte procedente, ya que lo que se permite con la exhaustividad, es de explorado derecho que este Órgano Auxiliar en materia electoral como autoridad administrativas, dicha Secretaria General del Instituto Electoral del Estado está constreñida a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de

las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar.

Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto señalan lo siguiente:

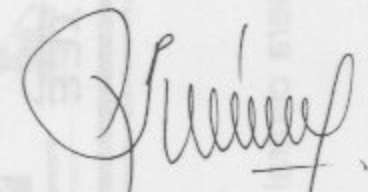
PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN (se transcribe).

;lo anterior aprobado por unanimidad de votos.-----

Una vez desahogado el único punto del orden del día, por lo que no habiendo más asuntos que tratar, se dio por concluida la sesión ordinaria de la Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias, siendo las once horas del día primero de febrero del dos mil diez.

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERO ELECTORAL

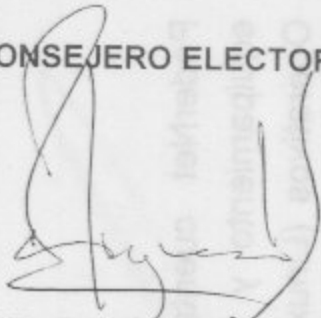


ROSALBA VELÁZQUEZ PEÑARRIETA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN



JOSÉ JOEL PAREDES OLGUÍN
SECRETARIO DE LA COMISIÓN

CONSEJERO ELECTORAL



MIGUEL DAVID JIMÉNEZ LOPEZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN

CONSEJERO ELECTORAL



PAUL MONTERROSAS ROMÁN
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN